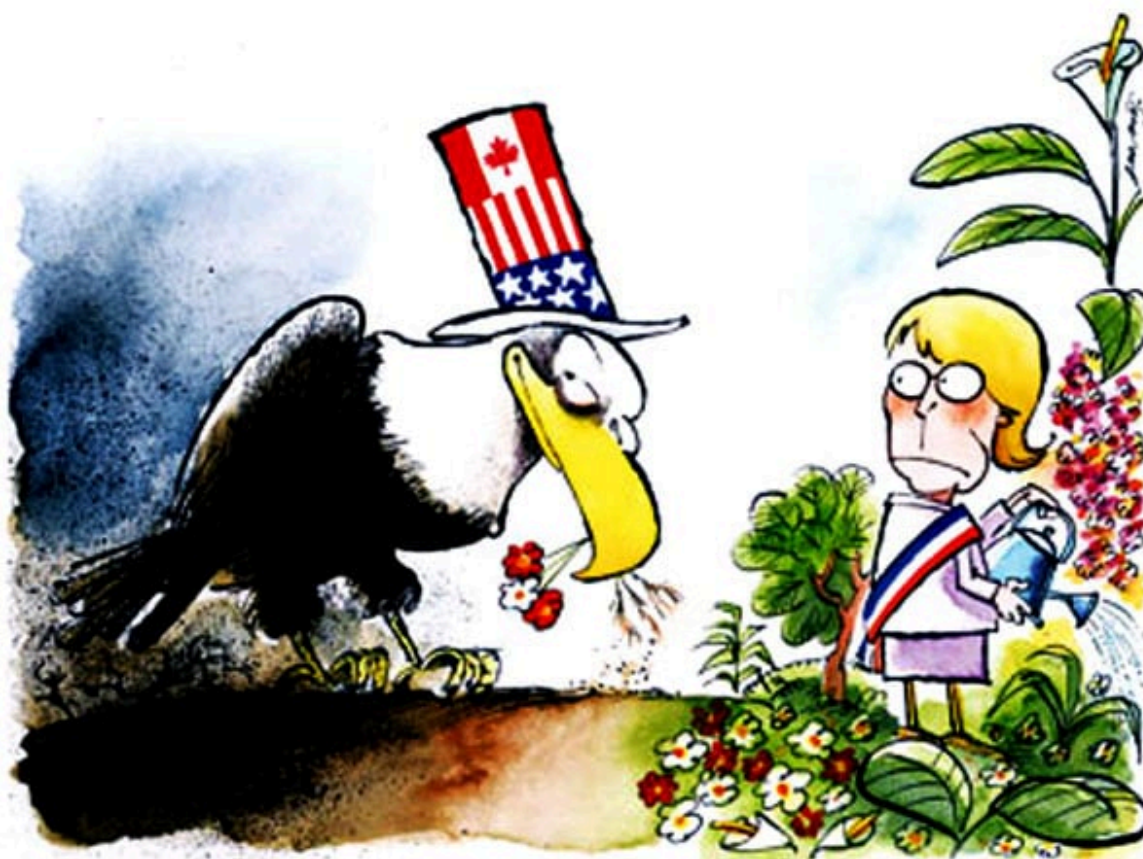


Convocatoria internacional a Universidades Canadienses para disolver Instituto Minero

El Ciudadano · 6 de enero de 2015





VANCOUVER, BC – Más de 1000 individuos y organizaciones de la sociedad civil han firmado una carta de petición para pedir que la coalición de universidades en Canadá disuelva el instituto minero, petrolero y gas que tiene su centro de operaciones en la Universidad de British Columbia ubicada en Vancouver.

Entre los signatarios se encuentran profesores de la Universidad de British Columbia incluyendo a Glen Coulthard, y profesores de la Universidad de Simón Fraser como a Stephen Collis, el profesor emérito David Suzuki, y la escritora Naomi Klein. A ellos se suman signatarios notables de América Latina y del mundo que incluyen al líder indígena y editor de la revista Lucha Indígena de Perú, Hugo Blanco, el economista y ex-miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta, el periodista uruguayo Raúl Zibechi y el conocido profesor Boaventura de Sousa Santos de la Universidad de Coimbra, Portugal.

Financiado con \$24.6 millones del gobierno federal y alrededor de \$21 millones por las universidades de la coalición y sus socios estratégicos, el Instituto Canadiense de los Recursos Internacionales y el Desarrollo – CIRDI (por sus siglas en inglés, y antes llamado CIIEID) – ha sido objeto de oposición constante tanto por académicos como de la sociedad civil.

La petición que está dirigida a los Presidentes y la junta administradora de la Universidad de la Columbia Británica, la Universidad de Simón Fraser y la Escuela Politécnica de Montreal, específicamente menciona que: la pérdida de la libertad académica, la representación parcializada, conflictos de interés, la falta de credibilidad, de confianza, y de rendición de cuentas son las razones para salir del acuerdo con el gobierno federal. Destaca que los signatarios ven dañino los vínculos de universidades con una industria que se encuentra rechazada por varias comunidades en Canadá y en todo el mundo por sus impactos destructivos en comunidades y en el medio ambiente.

CIRDI es un proyecto con orígenes en la oficina del Primer Ministro cuando en 2013 la coalición de tres universidades firmó un acuerdo con el gobierno federal para gestionar el instituto con el mandato de intervenir en “las políticas, leyes, desarrollo e implementación regulatorio, capacitación, asistencia técnica e investigación aplicada relacionada a sus propios sectores extractivos de los países en vías de desarrollo.”

Una incoherencia fundamental en el mandato de CIRDI es que los sectores extractivos de los llamados “países en vías de desarrollo” están compuestos en mayoría por transnacionales basadas en Canadá. Las comunidades indígenas, no indígenas, y organizaciones de base en solidaridad con los pueblos afectados por proyectos extractivos han hecho continuos llamados para tomar cartas en el asunto y poner fin a la impunidad de las empresas canadienses. Así mismo, han exigido mecanismos de rendición de cuentas en la legislación canadiense para que

dichas empresas se hagan responsables en nuestras cortes por los abusos cometidos en el extranjero.

Ahora académicos, ex-alumnos y miembros de la comunidad impactados en Canadá y América Latina han dejado en claro a los que toman las decisiones en las universidades que en vez de intentar reparar un experimento irremisiblemente defectuoso y dañino, es hora de establecer un precedente y disolver el CIRDI y promover en su lugar investigación sobre el rol y los impactos que tiene el extractivismo canadiense en el extranjero y que sea realmente libre de conflictos de intereses.

La carta destaca que “un instituto apropiado debería rendir cuentas a las comunidades impactadas por proyectos extractivos, y enfatizaría sus derechos al consentimiento libre, previo e informado, el cual incluye el derecho de rechazar cualquier proyecto extractivo. El enfoque apropiado de tal instituto sería sobre la responsabilidad de Canadá en los conflictos causados por la extracción de recursos, tanto en Canadá como en el extranjero, así como abordar la escasa rendición de cuentas por las multinacionales canadienses acusadas de alguna participación en abusos en el extranjero.”

Los signatarios de la carta de petición esperan que la Junta Directiva se comprometa a disolver el Instituto Internacional Canadiense de Desarrollo de Recursos.

Más información: La página web de estudiantes stoptheinstitute.ca contiene información sobre CIRDI, análisis, recomendaciones, un comunicado abierto y un blog con información actualizada sobre la campaña para disolver el instituto. Vean también la página web de [CIRDI](#) y este [informe](#) de marzo de 2014 de MiningWatch Canadá sobre el nuevo instituto (entonces llamado CIIEID).

Ver el texto completo de la petición [aquí](#). [con copia abajo] **y firme la petición**

Contactos:

Información general: info@stoptheinstitute.ca

Samuel Stime (estudiante en UBC)

samuel.stime@gmail.com

+1.604.831.3440

En Línea: <http://stoptheinstitute.ca/petition-demands-closure/>

Petición para disolver el CIEID (ahora llamado CIRDI)

Petición presentada a: La junta administradora de la Universidad de la Columbia Británica (UBC-University of British Columbia) y su Presidente Arvind Gupta, la junta administradora de la Universidad Simon Fraser (SFU-Simon Fraser University) y su Presidente Andrew Petter y la junta administradora de la Escuela Politécnica de Montreal (EPDM-Ecole Polytechnique de Montreal) y su Presidente Ejecutivo Christophe Guy.

OBJETIVO:

Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (CIEID por su nombre en inglés) y ahora el Instituto Internacional Canadiense de Desarrollo de Recursos (CIRDI por su nombre en inglés). Nosotros y nosotras, abajo firmantes, estudiantes, egresados y egresadas, profesores y profesoras y miembros de la comunidad, estamos preocupados por el CIEID o CIRDI, un instituto minero establecido por el gobierno canadiense y una coalición entre UBC, SFU y EPDM. Sus oficinas se encuentran en Vancouver, en los territorios no-cedidos y ancestrales de los pueblos indígenas de las Primeras Naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. Según los documentos fundacionales del CIEID o CIRDI (el Instituto en adelante), sus objetivos son

“mejorar la capacidad de los países en vías de desarrollo de usar y beneficiarse de sus recursos del sector extractivo para estimular el crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza”. Sin embargo, la intervención canadiense en las políticas de recursos naturales de gobiernos soberanos ha demostrado traer beneficios a las transnacionales canadienses al costo de los derechos humanos (particularmente de pueblos indígenas), procesos de toma de decisiones sobre recursos tanto locales como nacionales y protección del ambiente y del interés público.

El Instituto es una iniciativa problemática por las siguientes razones (más detalles y documentación están disponibles en <http://stoptheinstitute.ca>)

1. PÉRDIDA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA:

El Instituto recibe dinero y otro tipo de contribuciones de compañías del sector extractivo y no hay ninguna protección de la influencia que estas contribuciones tendrán sobre la toma de decisiones, actividades, y publicaciones del Instituto. Adicionalmente, el contenido de cualquier publicación debe ser aprobado por el Departamento de Asuntos Extranjeros, Comercio y Desarrollo. Esto silencia el diálogo y la investigación crítica de los académicos sobre la extracción de recursos naturales.

2. REPRESENTACIÓN SESGADA Y CONFLICTOS DE INTERÉS:

Las multinacionales que han sido acusadas de ser cómplices en abuso de derechos humanos, destrucción ambiental y abuso de derechos en la tierra de pueblos indígenas son parte de la estructura de liderazgo del Instituto y su red de “Socios Estratégicos”; por otro lado, comunidades afectadas por la minería y grupos de base críticos de la minería han sido completamente excluidos de dicha estructura. Los documentos fundacionales del Instituto priorizan actividad en regiones con una importante presencia de inversión extractiva

canadiense resaltando el conflicto fundamental de interés de este Instituto con su declarada visión de aliviar la pobreza.

3. FALTA DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA:

Recientes incidentes en los sitios de extracción minera canadienses tanto en Canadá como en el extranjero y los conflictos de tierra y soberanía pendientes por resolver entre pueblos indígenas de Canadá y el gobierno canadiense, ponen en duda “el conocimiento experto” canadiense en aspectos técnicos y sociales de la extracción de recursos naturales que el Instituto espera exportar.

4. FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Aunque el Instituto está usando fondos públicos y recursos académicos (incluyendo matrícula estudiantil) y a pesar de varias cartas enviadas por estudiantes a la junta directiva universitaria, no ha habido ninguna respuesta de preguntas sobre su presupuesto, proyectos y las cartas de apoyo de la red de socios. No queremos que nuestras universidades públicas estén asociadas con una industria que está siendo actualmente rechazada por varias comunidades en Canadá y el mundo a causa de su impacto destructivo en las vidas y territorios de estas comunidades. Un instituto financiado con dinero público que investigue la industria minero-energética solo podría ser apropiado si es completamente independiente de las multinacionales del sector extractivo y sus gremios industriales. No recibiría ningún dinero ni ningún tipo de contribuciones de multinacionales o de grupos que representan dicha industria; así mismo, el Departamento de relaciones exteriores del gobierno federal no tendría ninguna influencia o veto sobre el trabajo de tal instituto. Un instituto apropiado debería ser responsable a las comunidades impactadas por proyectos extractivos, y enfatizaría sus derechos al consentimiento libre, previo e informado, el cual incluye el derecho de legislar en contra o rechazar cualquier proyecto extractivo. El enfoque apropiado de tal instituto sería la responsabilidad de Canadá en los

conflictos sobre extracción de recursos, tanto en Canadá como en el extranjero, y la escasa rendición de cuentas por las multinacionales canadienses acusadas de alguna participación en abusos en el extranjero.

EN RESUMEN, debido a esta falta de libertad de cátedra, falta de imparcialidad, falta de credibilidad y falta de rendición de cuentas, le exigimos a las universidades de esta coalición de disolver el Instituto.

Jennifer Moore

Latin America Program Coordinator

MiningWatch Canada

tel: 613.569.3439 / fax: 613.569.5138

www.miningwatch.ca

<https://www.facebook.com/MiningWatch>

twitter: @MiningWatch

Ver tambien: <http://www.miningwatch.ca/home>

Fuente: [El Ciudadano](#)